

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL

Manizales, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte (2020)

RADICADO: 2019-00424
PROCESO: RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO
DEMANDANTE: LUZ HELENA ARIAS OSORIO
DEMANDADO: LUZ KARIME MUÑOZ TRUJILLO Y OTRO

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide el Despacho el recurso de reposición formulado por la apoderada de la parte demandante, frente al auto 21 de agosto de 2020 que ordenó el levantamiento de una medida cautelar.

II. ANTECEDENTES

Mediante sentencia del 11 de marzo de 2020, se decidió el presente proceso, declarándose terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, ordenándose la restitución del bien a la arrendadora y el lanzamiento en caso de que no fuere desocupado en el término correspondiente.

El pasado 21 de agosto, transcurridos más de los 30 días para ejecutar la sentencia a continuación del proceso verbal sumario, la parte demandante no lo había hecho y por tanto se decidió levantar las medidas cautelares decretadas dentro del asunto.

En desacuerdo con la decisión, la apoderada activa presentó recurso de reposición en subsidio apelación.

De acuerdo a lo ordenado en concordancia con el artículo 110 del C.G.P, se corrió traslado del recurso interpuesto, sin recibirse pronunciamiento de la parte demandante.

III. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Aduce la doctora María Doralba Correa Arroyave en resumen, que en virtud a la situación de urgencia que atraviesa el país, sólo hasta el 13 de julio de 2020 se enteró de la sentencia emitida dentro del proceso al solicitar el expediente digital, motivo por el cual el 06 de agosto del año avante, procedió a instaurar demanda ejecutiva, que registró en la plataforma que habilitó la Rama Judicial para ello, y por error creyó que ya solo debía quedar a la espera que le notificaran alguna decisión por estado, y como no aparecía nada empezó a indagar y para sorpresa el 24 de agosto, se enteró del levantamiento de la medida cautelar.

Ante dicha situación, procedió a consultar que había sucedido con la demanda que había radicado el 06 de agosto de 2020, y se enteró que el 10 del mismo mes y año, el centro de servicios judiciales le comunicó que no le darían curso a la demandada porque solo había mandado los anexos.

Por lo anterior, solicita no levantar la medida cautelar, ya que el yerro se debió a la dificultad que se le ha presentado para el manejo de la justicia digital y el desconocimiento en el funcionamiento de los sistemas de información.

IV. CONSIDERACIONES

Contempla el artículo 306 de la norma procesal civil, que la ejecución de una sentencia judicial, podrá solicitarse a continuación de la orden, ante el mismo juez, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la misma.

En el presente asunto, el fallo de instancia se profirió el 11 de marzo de 2020 y fue notificado por estado N° 040 del 12 de marzo del mismo año; los términos de ejecutoria de la sentencia corrieron los días 12 y 13 de marzo y 01 de julio de 2020, atendiendo que la suspensión de términos judiciales se dio a partir del 16 de marzo de 2020, por la emergencia que atraviesa el país a causa del Covid 19 y se reanudaron el 01 de julio del año en curso.

En ese orden, el tiempo de que trata el canon mencionado ut supra, para la ejecución de la sentencia y la consecuente conservación de las medidas cautelares decretadas dentro de este proceso verbal sumario de Restitución de Inmueble Arrendado, corrieron a partir del 02 de julio y hasta el 14 de agosto de 2020.

Dentro de dicho lapso de tiempo, no se recibió en este despacho, la solicitud de ejecución de sentencia proveniente de la parte interesada, ergo se procedió con el desembargo correspondiente.

Por su parte, la apoderada demandante argumenta que dicha omisión se debió a un yerro involuntario en el que incurrió al desconocer que la solicitud de ejecución debía radicarse ante el juzgado y no como una nueva demanda en el aplicativo dispuesto para ello, a la que además no se le dio trámite de parte de la Oficina Judicial por cuanto estaba incompleta y solo presentaba los anexos.

Aunado a lo anterior, también precisa que su desconocimiento en el manejo de la justicia digital y los sistemas de información, le impidieron conocer la sentencia judicial, adelantar la consecuente ejecución y la llevaron a cometer el lapsus calami.

Sobre el particular, menester es precisar que la decisión fue emitida el 11 de marzo de 2020, notificada por estado al día siguiente, y para la época, las notificaciones y la administración de justicia se prestaban de manera ordinaria, es decir, presencial y los estados se encontraban a disposición de los interesados en las instalaciones del Despacho, lo que en principio llevan al trasto los argumentos de la recurrente, tendientes a justificar su negligencia con la emergencia nacional y el cambio en el manejo de la justicia, que ahora en su mayoría es digital.

De otro lado, el 01 de julio de 2020 se reanudaron los términos judiciales y los juzgados comenzaron a funcionar de manera regular, las notificaciones y demás actos procesales sobre los que hubo cambios para la prestación del servicio de administración de justicia fueron regulados por el Decreto 806 de 2020, y cada Dirección Seccional del Consejo Superior de la Judicatura, en este caso, Manizales, implementaron diferentes sistemas de acceso a la misma y formas de trabajo, las cuales fueron divulgadas por los diferentes canales y medios para que el público y la comunidad judicial tuvieran conocimiento de lo empleado.

En ese sentido, no puede pretender la apoderada recurrente que se acepte como excusa jurídicamente atendible, el desconocimiento del manejo de la justicia digital y los sistemas informáticos y/o de información, pues es su deber no solo como ciudadana, sino como abogada, conocer el contenido de las normas y demás decretos que regulan la materia, así como los medios que se ponen a disposición para la prestación del servicio de

administración de justicia que fueron de amplia divulgación y conocimiento de la sociedad en general; además debe advertirse que nada cambió frente la ejecución de las sentencias reglamentada en el Código General del Proceso, es decir, que le asistía la obligación de estar pendiente de la notificación del fallo y si le interesaba ejecutarlo, debía cumplir con lo previsto en la norma concreta; pues la obediencia al derecho no puede dejarse a merced de la voluntad de cada uno, al conocimiento preciso de determinado tema, o a la situación y/o dificultad por la que esté pasando específica persona, considerarlo siquiera, iría en contra de los principios constitucionales como el de la ignorancia de la Ley no sirve de excusa, la igualdad de las partes ante ley, el debido proceso, entre otros; aún más teniendo en cuenta que como profesional del derecho e interviniente en la comunidad judicial tiene fácil acceso al contenido propio para el ejercicio de su profesión.

Los argumentos transcritos de la citada opositora, solo son cuestiones de carácter subjetivo que no pueden servir de fundamento jurídico para el incumplimiento de la ley, motivo por el cual, no se repondrá la decisión confutada.

Finalmente, no se concede por improcedente, el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria, ya que nos encontramos frente a un proceso verbal sumario, por ende de única instancia.

Por lo expuesto, el JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES,

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER el auto proferido 21 de agosto de 2020 que ordenó el levantamiento de una medida cautelar.

SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

JCB